



## SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	Ordinario – Declaración sociedad de hecho
DEMANDANTE	Ana Carolina Silva Suescún
DEMANDADOS	Blanca Nubia González Franco y otros
RADICADO	05001 31 03 011 2012 00675 02
DECISIÓN	Concede amparo de pobreza y niega solicitud de pérdida de competencia.

Medellín, doce de mayo de dos mil veintitrés

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Código General del proceso se concede el amparo de pobreza solicitado por Yuly Vanessa Echeverri Grisales, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.020.761.572. De acuerdo con lo anterior, el apoderado judicial Hugo Castrillón Aldana, identificado con cédula de ciudadanía 70.068.775 y portador de la T.P. 50.673 del C.S. de la J. continuará con la representación judicial de la amparada por pobre.

2. En atención al memorial mediante el cual el apoderado judicial de la demandada pide que se declare la pérdida de competencia en el asunto de la referencia porque se ha desconocido los términos del artículo 121 del Código General del Proceso, esta dependencia judicial expone a continuación las razones para no acceder a tal solicitud:

2.1. Según el Acuerdo PSAA15-10392 de 2015, el Código General del Proceso entró en vigencia en todos los distritos judiciales del país el 01 de enero de 2016, íntegramente. No obstante, el Tribunal Superior de Medellín, para esa fecha no pudo empezar a trabajar exclusivamente con el sistema de oralidad en los términos de dicho acuerdo y del nuevo estatuto procesal, debido a las dificultades en cuanto a la dotación logística de las salas previstas para la práctica de las audiencias, lo cual retrasó la celebración de las mismas tanto en el sistema de la Ley 1395 de 2010 como en el del Código General del Proceso; situación que ocasionó el represamiento de los procesos regidos por estas disposiciones y que se mantuvo pese a la solución temporal que se dio con la entrega oficial de una sala provisional para que los 12 despachos

tramitaran las audiencias orales desde el 14 de abril de 2016 hasta marzo de 2017 en que el Tribunal fue trasladado a la nueva sede y se hizo entrega de las salas de audiencia que se requería.


2.2. A lo anterior se suma que para la aplicación del nuevo sistema de oralidad estaba prevista la implementación de despachos de descongestión que permitieran iniciar con un inventario de procesos en cero para el recibo de los procesos a decidir en el plazo establecido en el Código General del Proceso; sin embargo, en el caso de la Sala Civil de este Tribunal cada despacho mantuvo el inventario de procesos tramitados bajo los sistemas escrito y mixto –Código de Procedimiento Civil, Ley 1395 de 2010 y Ley 1564 de 2012-, sin que se hubiera implementado medidas especiales para la salida de estos, así que en este despacho no se dejó a un lado esos asuntos, sino que siguieron siendo atendidos en el orden que traían. Estas circunstancias han impedido la atención de los términos previstos para proferir las respectivas decisiones en segunda instancia, pues de haberse provisto las medidas requeridas para el funcionamiento de la reforma, el despacho no tendría expedientes con números de radicación menores a 2016, y por ejemplo en este caso se tiene que, entre otros, en el inventario de los procesos a cargo del mismo, obra el expediente radicado 05001-31-03-002-1995-03785-05, que ingresó a este despacho el 06 de marzo de 2019 para desatar la apelación de la sentencia de primera instancia.

2.3. Los cierres por la pandemia del Covid 19, la suspensión de términos y la necesidad de digitalizar los procesos, son factores adicionales generadores del atraso, justificado por todas esas vicisitudes, que en tal medida determinan la calificación del plazo transcurrido, como razonable para proferir la decisión de fondo en el asunto que a esta fecha se encuentra en la elaboración del proyecto para el estudio de la sala. Esto se aviene, además con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-341 de 2018, en cuanto a que, para la aplicación de lo indicado en el artículo 121 del Código General del Proceso, se debe atender particularmente a las circunstancias y a la complejidad del asunto objeto de estudio, puesto que en el caso *sub judice* se evidencia que el expediente contiene 25 cuadernos, más de 3.800 folios y audios con más de nueve horas de grabación.

3. Así, con miras a evitar que el término para decidir de fondo la segunda instancia se extienda más ante una eventual declaratoria de la pérdida de

competencia, lo cual retardaría de manera objetiva la obtención de una decisión que en el caso de la referencia ya se aproxima; el despacho niega la solicitud de pérdida de competencia, e informa al memorialista que en aras de completar el trámite del asunto ya abordó el estudio de la foliatura para emitir sentencia de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
MARTHA CECILIA LEMA VILLADA  
Magistrada sustanciadora